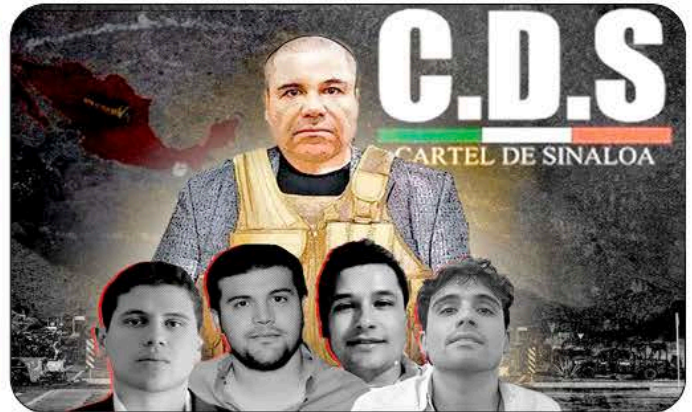




Gerardo
Mérida
Sánchez



General Mérida presentará pruebas de financiamiento del narco en elecciones de Morena

TANYA ACOSTA

Luego de cruzar la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses, de inmediato el general Gerardo Mérida Sánchez aseguró a las autoridades que en una caja mediana que llevaba con él guardaba información confidencial sobre la forma en la que el narcotráfico apoyó y financió las campañas electorales de Morena en 2018 y 2024.

De igual manera, fuentes internas del Departamento de Justicia aseguran que la información que presentará a las autoridades está relacionada con otros altísimos mandos de la 4T a los que aluden y afectan los materiales probatorios que serán utilizados.

Las mismas fuentes consultadas, adelantan que la caja del general y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa contiene videos, memorias USB y documentos que planea entregar al Departamento de Justicia para apuntalar su petición de convertirse en "testigo protegido" o "testigo colaborador" en el juicio por narcotráfico y asociación con "Los Chapitos", que ya está abierto en la Corte Sur de Nueva York en contra de Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho acusados, entre los que está incluido el propio nombre de Mérida Sánchez.

Según información de fuentes cercanas, el militar en retiro también lleva evidencias y documentos sobre cómo fue la orden presidencial fulminante para que el Ejército mexicano soltara a Ovidio Guzmán López, que ya estaba capturado y listo para ser enviado a Estados Unidos, aquel 17 de octubre de 2019 en Culiacán, donde una célula de élite militar lo había logrado detener en una de sus casas de seguridad.

Se detalla en el contenido del documento citado, que la detención, que se había realizado por una orden de aprehensión con fines de extradición que había enviado el gobierno estadounidense de Donald Trump, tuvo que ser abortada y Ovidio liberado porque así lo ordenó de manera fulminante la Presidencia de la República, ante la rebelión armada de los grupos del Cartel de Sinaloa que tomaron la capital del estado y amenazaban con



Ovidio Guzmán López



Salvador Cienfuegos Zepeda

asesinar a familiares de militares.

De acuerdo con las mismas fuentes, el general Mérida Sánchez también llevó con él documentos y pruebas de un presunto financiamiento a las campañas presidenciales de Morena en 2018 y en 2024, lo que, de comprobarse, sería una denuncia perturbadora que impactaría y debilitaría la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, y la de Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

Fuentes internas del Departamento de Justicia aseguran que Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega tardaron casi 15 días negociando y dialogando con la Embajada de Estados Unidos en México, y lograron un acuerdo de colaboración a cambio de reconsiderar las acusaciones en su contra, razón por la que, en situaciones diferentes, los dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa se entregaron a la justicia de Estados Unidos, como si se tratara de algo espontáneo, aunque ya estaba planeado y previsto que ocurrieran en el momento pactado.

Según adelantan fuentes internas, se sabe que el general Mérida Sánchez y Díaz Vega tuvieron acceso a información sobre los acuerdos con los narcos sinaloenses, el primero, y el segundo conoció todo el manejo financiero de Rocha Moya, desde su campaña hasta su gobierno, incluidos los negocios multimillonarios que se atribuyen a los hijos del hoy gobernador escondido y con licencia.

Las autoridades consultadas sobre el tema en Estados Unidos alertan que, lo que se viene para Morena y para el gobierno de Sheinbaum, será bastante complicado y advierten que las autoridades de aquel país, se van cobrar las burlas y ofensas que AMLO mantuvo durante su mandato hacia la DEA y hacia las instituciones estadounidenses.

Las fuentes internas revelan también que "la DEA y la CIA se han aliado en esta cruzada contra la narcopolítica de Morena y lo que reclaman, entre otras cosas, es el caso del general Salvador Cienfuegos, que fue regresado por la justicia estadounidense, después de haber sido capturado en Los Ángeles, bajo la condición puntual de que la justicia mexicana lo juzgara, algo que nunca ocurrió", recuerdan.

Más tarde, el exsecretario de Defensa, lejos de un juicio, le dieron su inmediata libertad y después hasta homenajes de desagravio le hicieron de la mano de las autoridades militares y civiles de México.

La segunda factura que está cobrando Estados Unidos al gobierno de la 4T es, precisamente, la liberación ilegal e inconstitucional de Ovidio Guzmán López, con la que el gobierno de Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo, toda vez que la detención se había realizado para cumplir una orden de detención con fines de extradición de la primera administración de Donald Trump.